

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, nueve (09) de septiembre de 2022

Auto Interlocutorio No. 355

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
EXPEDIENTE:	76001-33-33-006-2020-00247-01
DEMANDANTE:	Personería Municipal de Yumbo personeria@personeriayumbo.gov.co
DEMANDADO:	Gerardo Alfonso Restrepo Rivera
MINISTERIO PÚBLICO	fjmoreno@procuraduria.gov.co
EXPEDIENTE VIRTUAL	76001-33-33-006-2020-00247-01
ASUNTO	Apelación de auto – revoca auto que rechazó la demanda

ADVERTENCIA SOBRE PUBLICIDAD DEL EXPEDIENTE Y MEMORIALES.

En aras del cumplimiento del artículo 46¹ de la Ley 2080 de 2021 que modifica el artículo 186 de la Ley 1437 de 2011, las partes cuentan con los documentos necesarios para formular sus alegaciones en la medida en que fueron notificados de todas las actuaciones surtidas en el proceso y se surtieron los correspondientes traslados.

La **Ley 2080 del 2021**, vigente en materia procesal a partir del 26 de enero de este año, reformó el CPACA, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

El **expediente físico** fue digitalizado y puede consultarse en el repositorio **MERCURIO**, previa solicitud de acceso al siguiente link <https://bit.ly/3i5HGEU> . En el siguiente link encontrará un video tutorial para el ingreso: <https://bit.ly/3BQHMIln>.

El **expediente digital** está en la sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **“CONSULTA DE PROCESOS”** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos, pedir CITA VIRTUAL y además deberán **RADICAR MEMORIALES Y ESCRITOS los cuales se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, por tanto, es el canal oficial para recibir memoriales** a partir del **16 de mayo de 2022**.

Para el ACCESO A LOS EXPEDIENTES debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo, anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso.

Para radicar memoriales debe ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso **y cargar los archivos con destino al proceso** en los formatos permitidos pdf,.docx,.doc,.xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB.

En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI [VENTANILLA VIRTUAL](#)

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG

I. OBJETO DE LA DECISION

Se resuelve recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio Nro. 748 del 25 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali, que rechazó la demanda.



II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la Personería Municipal de Yumbo, y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (acción de lesividad) en contra del señor Gerardo Alfonso Restrepo Rivera, a través de la cual demanda la nulidad parcial del acto administrativo contenido en la Resolución No. 1485 del 31 de diciembre de 2008 y de la Resolución No. 252 del 30 de junio de 2020, actuación administrativa por medio de la cual se resolvió la solicitud de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación del señor Gerardo Alfonso Restrepo Rivera.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

El el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali mediante auto 748 del 25 de octubre de 2021, rechazó la demanda al considerar que con fundamento en el numeral 2° del artículo 169 del C.P.A.C.A., la parte actora no logró subsanar el yerro encontrado en el libelo de la demanda titulado “*De la capacidad para ser parte en un proceso*”, al evidenciar que dicha capacidad recaía en el municipio de Yumbo y que por lo tanto no se podía aceptar a la referida personería (demandante) como parte autónoma, por carecer de personería jurídica, coligiendo el A quo que la parte actora en este aspecto debía ser el Municipio de Yumbo.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Sostiene la parte recurrente lo siguiente:

“...El rechazo de la demanda expuesto en el auto interlocutorio No. 748 Octubre 25 de 2021 objeto de impugnación y fundamentado en la falta de capacidad procesal de comparecer al proceso como demandante, es contraria no solo a lo dispuesto en el artículo 159 Inciso final del CPACA sino como fue advertido a la interpretación del Consejo de Estado frente a la capacidad para ser parte de órganos que carecen de personería jurídica.

Se advierte entonces que en la subsanación de la demanda fue advertida la capacidad procesal para ser parte de la Personería Municipal de Yumbo en el proceso contencioso administrativo por ministerio de la Ley 1437 de 2011, artículo 159, inciso final y el numeral 13 del artículo 136 de 1994, que establece como función del personero interponer acciones judiciales y administrativas pertinentes para defender el patrimonio público y como se observa el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho lesividad tiene como objeto el restablecimiento del dinero público, adicional a lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha referido que los órganos de control, las contralorías y personerías, no pertenecen al sector central o descentralizado conforme lo indica la sentencia mencionada.

Con fundamento en lo expuesto, al observarse de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que las personerías municipales como órganos de control no pertenecen a la rama ejecutiva del sector público no es exigible la representación judicial de otra entidad del orden municipal para la defensa de sus derechos, en ese orden de ideas, es claro que se encuentra demostrado la capacidad para ser parte en el proceso conforme los artículo 159 del CPACA y el numeral 13 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994.

Por tal razón no dudamos en absoluto que la Personería Municipal de Yumbo si está legitimada en la causa por activa, al tener la capacidad jurídica para ser parte de un proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por ello la decisión impugnada debe ser en nuestro criterio, revocada por el Tribunal Administrativo del Valle para que en su lugar se ordene disponer la admisión de la demanda en primera instancia...”

De conformidad con lo anterior, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado para reforzar los argumentos expuestos en el recurso de alzada.



V. CONSIDERACIONES:

a. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

b. PROBLEMA JURÍDICO

En el presente caso, el problema jurídico se contrae en determinar si en el presente caso es proceden rechazar la demanda por considerarse que la Personería municipal de Yumbo cuenta o no con personería jurídica para hacerse parte en los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

c. MARCO JURISPRUDENCIAL.

De cara al problema jurídico planteado, es pertinente referirnos al marco constitucional que delimita el ejercicio propio de las actividades desarrolladas por los Personeros, el cual en su artículo 118, consagra:

“El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados, y los agentes del Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.”.

Por su parte, el **artículo 168 de la Ley 136 de 1994**, *“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”*, al referirse al tema de las Personerías Municipales, dispuso que no obstante poseer autonomía administrativa y presupuestal, no tiene el carácter de persona jurídica del orden municipal para efectos de comparecer a juicio en defensa de la legalidad de sus propios actos. Veamos la norma:

“ARTICULO 168. PERSONERIAS. <NOTA DE VIGENCIA: Subrogado íntegramente por el artículo 8o. de la Ley 177 de 1994, publicada en el Diario Oficial No. 41.653 del 28 de diciembre de 1994.

*Las personerías del distrito capital, distritales y municipales, **cuentan con autonomía presupuestal y administrativa**. En consecuencia, los Personeros elaborarán los proyectos de presupuesto de su dependencia, los cuales serán presentados al Alcalde dentro del término legal, e incorporados respectivamente al proyecto de presupuesto general del municipio o distrito, el cual sólo podrá ser modificado por el Concejo y por su propia iniciativa. Una vez aprobado, el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde.*

Las personerías ejercerán las funciones del Ministerio Público que les confieren la Constitución Política y la ley, así como las que reciba por delegación de la Procuraduría General de la Nación.

Las personerías contarán con una planta de personal, conformada, al menos, por el Personero y un Secretario”.

Teniendo en cuenta las mencionadas normas constitucionales y concretamente frente a la **ausencia de personería jurídica** de las Personerías Municipales, el Consejo de Estado¹ ha tenido oportunidad de pronunciarse, en los siguientes términos:

“Conforme a la norma constitucional, la personería municipal es un organismo de control estatal

¹ sentencia del 18 de abril de 2002, C.P. Alberto Arango Mantilla Radicación: 76001-23-31-000-1998-1106-01(2547-00), Actor: Elizabeth Padilla Pérez, Demandado: Personería Municipal De Santiago De Cali,



que representa y vela por los intereses de la colectividad ante las demás autoridades administrativas y judiciales, cumpliendo funciones de Ministerio Público a nivel local, en lo que tiene que ver con la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, así como, las demás funciones que por disposición legal le corresponden (ley 136 de 1994 - art. 178).

Al referirse al régimen de las personerías municipales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dijo:

“... el régimen de las Personerías, que comprende, de una parte, su organización; y, de otra, su actividad o función, pertenece, por una u otra, al régimen administrativo de los Municipios o Distritos colombianos.

Como organización, las Personerías integran la Administración Municipal, en tanto que corresponde al Concejo Municipal o Distrital determinar, conforme a la ley, su estructura y funciones, y elegir al Personero, de conformidad con lo previsto en el artículo 313, numerales 6 y 8 de la Constitución; del mismo modo, corresponde a los alcaldes y al concejo, elaborar y aprobar los presupuestos de las Personerías (ley 166 de 1.994)

(...)

Como actividad o función, las Personerías municipales y distritales tienen a su cargo el “control administrativo” en el municipio (art. 168, ley 136 de 1.994), que comprende, entre otras atribuciones, las de “Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales”, “Ejercer la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas municipales...”, “Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas municipales..” (art. 178, núms. 3, 4, 21, de la ley 136 de 1.994), funciones éstas que no son exclusivas del Ministerio Público.”¹.

Ahora bien, la personalidad jurídica debe consagrarse formalmente en el acto de creación de la entidad, evento en el cual se determina, por ejemplo, que se trata de un establecimiento público, o de una sociedad de economía mixta, o de una empresa industrial y comercial del estado, o de cualquier otra forma de organización político administrativa que le confiera dicha naturaleza y, esa capacidad jurídica, en el caso de la personería municipal no se presenta.

En otras palabras, la personalidad jurídica de un ente estatal debe estar dada expresamente en la Constitución, en la ley o bien en el acto de su creación. Pues, en tratándose de procesos contencioso administrativos, las partes se legitiman si, siendo demandante, es la persona que de conformidad con la ley está habilitada para que se resuelva si existe o no el derecho en la relación jurídica sustancial y, respecto del demandado, si es la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión del demandante

*En el caso sub-examine, si bien a la personería municipal se le atribuyen funciones de control administrativo, tal organismo, no obstante poseer autonomía administrativa y presupuestal (artículo 168 de la ley 136 de 1994), se insiste, **no tiene el carácter de persona jurídica del orden municipal para efectos de comparecer a juicio en defensa de la legalidad de sus propios actos.***

Así, en esas condiciones, el Tribunal Administrativo no podía declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del Municipio de Santiago de Cali, pues, sin duda, como se expresa, por la legalidad del acto demandado debe responder dicho municipio, entidad que viene actuando desde que se inicia el presente proceso en primera instancia. (...).”

En conclusión, las Personerías Municipales si bien gozan de autonomía administrativa y presupuestal, carecen de personería jurídica por ser parte de la administración municipal. En efecto, se ha indicado que es parte integral de la administración porque es el Concejo Municipal quien determina, conforme a la ley, su estructura, funciones y elige al Personero de acuerdo al artículo 313, numerales 6 y 8 de la Constitución. Así mismo, porque corresponde a los alcaldes y al concejo municipal elaborar y aprobar el presupuesto de la Personería². Además, porque las personerías tienen a su cargo el “control administrativo” en el municipio y ejercen las

¹ Sentencia de 18 de enero de 2000, exp. AI-046, M. Ponente Juan Alberto Polo Figueroa.

²Artículo 168 de la Ley 136 de 1994 y Ley 166 de 1.994.

funciones propias del Ministerio Público³.

SECCIÓN PRIMERA del Consejo de Esta sobre la capacidad para ser parte, preciso⁴:

“IV.3.2. Capacidad para ser parte

El artículo 53 del Código General del Proceso establece lo siguiente: **"CAPACIDAD PARA SER PARTE.** Podrán ser parte en un proceso: 1. **Las personas naturales y jurídicas.** 2. Los patrimonios autónomos. 3. El concebido, para la defensa de sus derechos. 4. Los demás que determine la ley." (Se destaca)

Por su parte, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011, establece:

"ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho **que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.**

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.

(...)."

En auto de 25 de enero de 2018, la Sala, con ponencia del Magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, acerca del concepto de capacidad para ser parte en el proceso explicó lo siguiente:

"En relación con el concepto de capacidad para ser parte, la doctrina^[6] ha señalado lo siguiente:

(...) Una cosa es la capacidad para ser parte, que la tiene toda persona por el solo atributo de la personalidad jurídica, es decir, por el solo hecho de ser persona, y otra, la capacidad para comparecer en juicio por sí misma [...] La capacidad para ser parte lo habilita para ser sujeto de una relación procesal como demandante, demandado, interviniente, por consiguiente, toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público, tiene capacidad para ser parte en el proceso (...)"

Así mismo, esta Corporación ha señalado, en providencia de 25 de septiembre de 2013, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero^[7], lo siguiente:

"(...)1. De la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso

³ Art. 178, núm. 3, 4, 21, de la ley 136 de 1.994), funciones éstas que no son exclusivas del Ministerio Público. Sentencia de 18 de enero de 2000, expediente AI-046, M. Ponente Juan Alberto Polo Figueroa.

⁴ Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018), Radicación: 25000-23-41-000-2013-02823-01., Actor: BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA – BENEDAN., Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Tradicionalmente se ha entendido que dos de los requisitos procesales, sin los cuales no es posible hablar de la validez de un proceso son: i) la capacidad para ser parte y ii) la capacidad para comparecer a éste.

1.1. Capacidad para ser parte

Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla.

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica[8] o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. En igual sentido, la doctrina comparada más autorizada sostiene:

"La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica. Será, por tanto, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.

(...)

"Las personas jurídicas –públicas y privadas- desde el momento que adquieren tal carácter tienen capacidad para ser parte. La condición de parte se atribuye a la persona, no a sus órganos. De aquí que es impropio, al referirse a la administración pública, decir que es parte 'la autoridad' que dictó el acto. Será parte la persona jurídica pública – Estado, Provincia, Municipio, entidad institucional – a que pertenece el órgano de que proviene el acto que dio lugar al proceso. Otra cosa será el órgano al que se otorga competencia para intervenir en el proceso a nombre de la entidad pública que es parte."[9] (Se destaca)

En el mismo sentido, en la sentencia de 22 de octubre de 2015[10], la Sala, con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas Ayala, señaló:

"7.1.30.- Para resolver la cuestión se impone aclarar que la capacidad para ser parte procesal se predica de los sujetos de derechos, es decir, de aquellas personas que, gracias a la personalidad jurídica que ostentan, son pasibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, o de quienes por expresa disposición legal cuentan con dicha capacidad. Distinta es la capacidad para obrar, que se refiere a la habilitación para actuar en el proceso. En tal sentido, es posible que una entidad goce de capacidad para ser parte más no de capacidad para obrar, o que, a contrario sensu, goce de capacidad para obrar más no para ser parte, circunstancia esta que suele ser recurrente en el derecho administrativo en tratándose de entidades que no gozan de personería jurídica. En tales eventos la llamada a ser parte en el proceso es la Nación dado que en esta recae el centro de imputación de derechos y obligaciones, de allí que el artículo 149 del CCA modificado por el artículo 49 de la Ley 446 del 98 haya dispuesto que "En los procesos Contencioso Administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho."

Como se advierte, la capacidad para ser parte en un proceso judicial deriva de la personalidad jurídica **o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de allí, se erige la capacidad como uno de sus atributos principales**. Luego, una entidad pública que carece de personería jurídica o que no está habilitada

legalmente, no tendrá capacidad para ser parte en el proceso respectivo, pues en él intervendrá la persona jurídica o la entidad habilitada de la cual haga parte, representada en los términos del artículo 159 del CPACA.”

De otra parte, el Consejo de Estado⁵ en pronunciamiento frente al tema ha manifestado lo siguiente:

"(...)

Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquella.

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso.

(...)

En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal..."

Con relación a la capacidad de las entidades públicas para comparecer como demandantes, demandados o intervinientes dentro de un proceso contencioso administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 del 2011, en su artículo 159, estableció:

"ARTÍCULO 159. CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

(...)

Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. **En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor.**"

En este orden de ideas, acogiendo el criterio establecido por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se tiene que por mandato de la Ley 1437 de 2011 la personería municipal de Yumbo tenía capacidad para comparecer al proceso, tal y como ocurrió en el presente caso, **pues si bien es cierto las Personerías Municipales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, también lo es, que no a pesar de no contar con personería jurídica, existe una ley que autoriza de manera expresa su habilitación procesal.**

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, C. P. Enrique Gil Botero, sentencia del 25 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1997-05033-01 (20420).



De conformidad con lo anterior, para la Sala es claro que, no existe tal yerro frente a la mencionada capacidad para comparecer al proceso, por lo tanto, lo que procede es revocar el auto por medio del cual se rechazó el presente medio de control.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- REVOCAR el auto Nro. 748 del 25 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cali, que rechazó la demanda instaurada por la Personería municipal de Yumbo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, se ordena al a-quo que provea sobre la admisión o inadmisión de la presente demanda, y ordene hacer las correcciones del caso, es decir, que se adecúe la demanda teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 160 y siguientes del CPACA., teniendo en cuenta que por expresa disposición legal la Personería Municipal de Yumbo tiene capacidad de comparecer al proceso de la referencia.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen para lo de su cargo.

TERCERO.- INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y escritos será la **VENTANILLA VIRTUAL** de SAMAI, como se explica en el capítulo de publicidad de esta providencia.

Proyecto discutido y aprobado en Sala de Decisión de la fecha. (Acta Virtual).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,

EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

OMAR EDGAR BORJA SOTO

Nota: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma SAMAI.